

Tecnocracia y gobernabilidad democrática en América Latina

Patricio Silva

Universidad de Leiden

Introducción

A partir de la década de los 80 América Latina ha experimentado un acelerado proceso de cambios políticos, económicos y sociales. En el plano político, se da inicio a un proceso de transición democrática que abarca prácticamente a toda la región y que pone fin a un largo período de regímenes autoritarios. En el terreno económico, la gran mayoría de los países latinoamericanos comienza a adoptar políticas económicas de corte neoliberal, lo que constituyó un quiebre radical con la estrategia de industrialización dirigida por el Estado que había regido durante largas décadas. Esta “doble transición” política y económica ha producido a su vez grandes transformaciones sociales. Lo que vemos es que la aplicación de los programas de ajuste económico de corte neoliberal y la reformulación del rol del Estado en el plano social, han ido a menudo acompañadas de una reducción de las tasas de empleo y del nivel de vida de los sectores populares, expresado en el explosivo aumento de la pobreza y la informalidad en la región.

Desde un primer momento surgió la pregunta si las nuevas democracias serían capaces de enfrentar exitosamente tanto los grandes problemas políticos, económicos y sociales heredados del período autoritario como los nuevos desafíos que planteaba el proceso de globalización (Malloy y Seligson, 1987). De esta manera, el logro y mantenimiento de un nivel adecuado de gobernabilidad democrática se convirtió en un objetivo primordial para la mayoría de los gobiernos de la región, entendiendo básicamente por esto la mantención de la estabilidad política, el logro de progreso económico y el mejoramiento del bienestar social de la población (Boeninger, 1997: 33).

Con el paso del tiempo la aplicación de políticas económicas neoliberales también se convertirían en un factor determinante en el accionar político de los gobiernos democráticos. Las nuevas autoridades sentían la presión de poder demostrar que eran más eficientes y capaces que lo que fueron los regímenes militares en procurar crecimiento económico y estabilidad financiera. Las autoridades políticas sabían que gran parte de la legitimidad de las nuevas democracias se construiría en base a la capacidad demostrada en alcanzar dichos objetivos. Es por esto que a partir de la

década del 80 una parte importante de los gobiernos latinoamericanos pasa a fortalecer los equipos económicos a cargo del diseño y la implementación de las políticas económicas. Dichos estamentos tecnocráticos comenzarán a expandir su influencia al interior del poder ejecutivo, ya que poco a poco las políticas públicas pasan a quedar subordinadas a los parámetros presupuestarios y a los objetivos macro-económicos establecidos por los encargados del área económica. Esto se traduce en el fortalecimiento de una tecnocracia estatal constituida por economistas y expertos financieros que comulgan con los objetivos de reducir el rol del Estado en el terreno económico y de expandir la presencia del mercado y del sector privado en todas las esferas de la realidad nacional. Las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo aplaudían y estimulaban la adopción de estas medidas dirigidas a fortalecer la economía de mercado y que concordaban plenamente con el llamado “Consenso de Washington” (Centeno y Silva, 1998).

El objetivo de este trabajo es explorar de qué manera el fuerte ascenso tecnocrático que se ha producido al interior de los gobiernos latinoamericanos a partir de los 80 ha influenciado la habilidad de los países de la región en lograr y mantener niveles de gobernabilidad que sean suficientes para asegurar la consolidación democrática. Para esto, el ensayo se centrará en el paradigmático caso chileno. A partir de la restauración democrática en 1990 se observa en Chile una fuerte tecnocratización en el proceso de tomas de decisiones al nivel de Estado y de gobierno, lo cual va acompañado del logro de uno de los más altos niveles de gobernabilidad y convivencia democrática que se hayan alcanzado hasta ahora en la región. Esto último se expresa en la obtención de un alto grado de estabilidad política, el establecimiento de sólidas bases para garantizar el crecimiento económico y la formulación y aplicación de políticas sociales eficaces.

En la primera sección se explora el debate académico que se ha generado respecto a las tensiones que se dan entre tecnocracia y democracia en América Latina y como estas han afectado el desarrollo económico, político y social de las últimas tres décadas. En la segunda sección se entrega un breve recuento histórico sobre la relación que ha tenido la tecnocracia con la democracia en Chile durante el siglo XX. Posteriormente en la tercera sección se explora el rol jugado por la tecnocracia en el proceso de transición democrática en la década de los 80 que culminó con la instalación del gobierno democrático liderado por Patricio Aylwin en 1990. En la cuarta y última sección se analizan los factores históricos, políticos y económicos que llevaron a los cuatro gobiernos de la Concertación en el período 1990-2010 a fortalecer la tecnocracia al interior de la administración del Estado y como esta última ayudó a fortalecer los niveles de gobernabilidad y la convivencia democrática en ese país.

1. Tecnocracia y gobernabilidad democrática

Los tecnócratas siempre han tenido una reñida relación con la democracia. Esto ya se hacía evidente en los primeros propulsores de ideologías tecnocráticas, tales como Henri de Saint-Simon y August Comte a comienzos del siglo XIX, quienes propiciaban la instauración de un “Estado administrativo” a cargo de una elite de científicos, expertos y hombres de empresa. De sus escritos queda rápidamente en evidencia que privilegiaban la preservación del orden social y la administración “positiva” o científica de los asuntos de Estado, por sobre la libertad individual, la participación popular y la democracia (ver Jones, 1998). Una serie de experiencias tecnocráticas en Europa y Estados Unidos durante el siglo XX también contribuye a reforzar la estrecha relación entre tecnócratas y regímenes e ideologías autoritarias. Entre estas experiencias se encuentran en primer lugar la de la Alemania nazi (Herf, 1984); el efímero movimiento tecnocrático de los años 20 en Estados Unidos, que desembocaría a comienzos de los años 30 en un movimiento de corte fascistoide (Bell, 1960; Veblen, 1965; Akin, 1977), y la experiencia de los socialismos reales en Europa oriental y en la Unión Soviética (Konrad y Szeleny, 1979; Rowney, 1989). Otro caso de especial relevancia para América Latina es el de la dictadura de Francisco Franco en España, quien desde fines de los años 50 se apoyó en un selecto grupo de tecnócratas Opus Dei para implementar sus políticas de industrialización y modernización, bajo la más férrea represión de sus contrincantes políticos (ver Fernández de la Mora, 1986).

En el contexto latinoamericano, la imagen de una supuesta “afinidad electiva” entre tecnocracia y regímenes autoritarios se hizo patente durante las décadas de 60 y 70 al establecerse en los países del Cono Sur del continente una serie de regímenes “burocrático-autoritarios”. En un trabajo seminal sobre este nuevo tipo de régimen político, Guillermo O’Donnell (1973) identificó a la tecnocracia civil como una de las principales aliadas de los militares en la coalición “pro golpe” y como figura clave en la ejecución de las políticas económicas de los regímenes militares. Bajo los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, un selecto grupo de economistas y expertos financieros adquirieron poderes discrecionales sin precedentes en la formulación e implementación de radicales reformas financieras y económicas (Ramos, 1986; Malloy, 1979). Pero, en la práctica, sería el paradigmático caso de los famosos Chicago Boys chilenos bajo el régimen de Pinochet a partir de mediados de los años 70 lo que crearía conciencia de la existencia de una alianza entre tecnócratas y militares en América Latina (ver Vergara, 1985, y Valdés, 1995). Finalmente, son muchos los que insisten en que hay una tendencia antidemocrática en la tecnocracia, puesto que los tecnócratas creen firmemente que las políticas erráticas formuladas en respuesta a una presión popular masiva sobre el aparato estatal nunca podrán solucionar los

problemas sociales, y que sólo ellos son capaces de formular e implementar las soluciones técnicas correctas para esos problemas (Meynaud, 1969; Putnam, 1977; Fischer, 1990; 2009).

En las últimas décadas han surgido un gran número de trabajos académicos sobre la realidad Latinoamericana en donde se señala el ascenso tecnocrático como una real amenaza para la gobernabilidad democrática en la región (ver por ejemplo, Treichman, 1997; Panizza, 2000). En esos estudios se subraya como la manera en que los gobiernos latinoamericanos y sus equipos económicos aplicaron las políticas de mercado no estuvo en la mayoría de los casos a tono con las reglas democráticas, ya que su ejecución careció de transparencia, faltó rendición de cuentas (accountability), no hubo un sistema de frenos y contrapesos, ni mucho menos mecanismos de representación política. Efectivamente, la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos optaron por otorgar un alto grado de “autonomía relativa” a sus equipos económicos. Estos últimos pasarían a ser “blindados”, de manera de mantenerlos a distancia de las críticas y de las presiones provenientes de adversarios políticos tanto en la esfera de la opinión pública como en el parlamento. Esto ha llevado a que muchos presidentes hayan aplicado las reformas neoliberales prácticamente sin contrapesos por parte de la ciudadanía y de la clase política. Según O’Donnell (1996, 1998) muchas de las democracias surgidas en los 80 se han convertido en “democracias delegativas”, en donde los mecanismos de rendimiento de cuentas “horizontales” (hacia otras instancias del Estado) y “verticales” (hacia la sociedad civil) han sido reducidos a un mínimo o simplemente han dejado de funcionar.

A fines de los 90 sin embargo también comienzan a surgir voces que subrayan el impacto positivo que también puede tener la tecnocratización de la política en la gobernabilidad democrática. En un estudio sobre diversas figuras latinoamericanas que en su condición de ministros de finanzas o de presidentes lideraron la aplicación de políticas neoliberales (Domínguez et al. 1997) alaban la contribución de estos “technopols” no solo a la estabilidad económica de sus países, sino que además al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. En lugar de subrayar los posibles peligros que implica la concentración de influencia y poder por parte de estos technopols, (Domínguez et al.) describen las deficiencias de las actuales democracias latinoamericanas como producto de la política tradicional en donde, tanto hoy como en el pasado, han dominado el patronaje, el clientelismo, las actitudes rentistas y en donde se da una fuerte corrupción. La llegada de estos technopols habría justamente abierto el paso para la modernización de las prácticas políticas y el establecimiento de mayores grados de transparencia. Así, Domínguez se refiere al ex ministro de finanzas de Brasil y ex presidente Fernando Henrique Cardoso como el arquitecto de la

governabilidad democrática en ese país “debido a su habilidad de construir una coalición de centro-izquierda que supo unir a la democracia con la estabilidad financiera y el avance social, permitiendo que Brasil retomara el camino del progreso”. También el líder del equipo económico del gobierno del presidente Patricio Aylwin en Chile, Alejandro Foxley, es presentado por Domínguez como un technopol quien “en forma brillante supo unificar la estabilidad macroeconómica y la construcción de una coalición democrática que prestó fuerte atención a la equidad social, creando con esto nada menos que un genuino modelo de desarrollo latinoamericano” (1997: ix).

Por otra parte, Williams (2006) ha argumentado que si bien es cierto que la fuerte presencia tecnocrática que se observa en los gobiernos latinoamericanos a partir de los años 80 posee elementos que pueden constituir una amenaza para la gobernabilidad democrática, la tecnocracia y la democracia no necesariamente tienen que encontrarse en posiciones diametralmente opuestas. Él indica tres campos en donde la tecnocratización del proceso de toma de decisiones puede traer ventajas para aumentar el nivel de rendimiento de cuentas (accountability) y la transparencia de las decisiones gubernamentales.

En primer lugar se encuentran las medidas dirigidas a que se respeten acuerdos contractuales, los derechos de propiedad, lo cual ha ayudado a que se reduzcan los niveles de incertidumbre entre los principales actores económicos, facilitando así la inversión y el crecimiento económico que va en beneficio de la gobernabilidad democrática. Estas medidas han ido acompañadas de reformas dirigidas a la modernización del poder judicial y el establecimiento de agencias regulatorias y de bancos centrales que sean efectivos y políticamente independientes. Williams señala que entre mayor sea el grado de profesionalización e independencia que posean estas agencias, mayor será su grado de credibilidad e institucionalidad para controlar efectivamente las acciones arbitrarias del poder ejecutivo.

En segundo lugar, Williams señala como positivo el proceso de profesionalización y de adquisición de mayor grado de conocimiento técnico que han experimentado desde los años 80 muchos parlamentos latinoamericanos, lo cual ha ido aumentando el grado de rendición de cuentas “horizontal” del poder ejecutivo al legislativo. Efectivamente, los parlamentos latinoamericanos han aprendido a comprender la jerga técnica utilizada por los tecnócratas a cargo de las políticas económicas y han avanzado en su capacidad técnica para interrelacionarse con los equipos económicos y a cuestionar sus políticas económicas no solo en base a argumentos políticos sino que también haciendo uso de argumentos técnicos.

Finalmente Williams se refiere a como las presiones económicas y políticas por parte de actores internacionales han ido presionando para que se alcancen mayores grados de transparencia y representación democrática (2006: 124-125). En este sentido, se pueden nombrar los esfuerzos de las agencias financieras internacionales en procurar que los gobiernos nacionales integren a representantes de la sociedad civil en la aplicación de programas sociales que cuentan con financiamiento externo. Lo mismo es válido respecto a la aplicación en América Latina de diversos programas diseñados por agencias internacionales para combatir la corrupción y para aumentar los grados de transparencia en el proceso de toma de decisiones.

Si bien la tecnocratización de las políticas económicas fue presentada por muchos gobiernos latinoamericanos y agencias internacionales como una medida para poner fin a las prácticas populistas del pasado, la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que también la tecnocracia y el populismo pueden ir de la mano (Demmer, Fernández y Hogenboom, 1991). Esto quedó en evidencia durante los gobiernos de Salinas de Gortari en México, Saúl Menem en Argentina y de Alberto Fujimori en el Perú, quienes, a la antigua andanza populista, hicieron demagógicas promesas al electorado de rápidas mejoras en su nivel de consumo y de calidad de vida en general. Pero en la práctica, pasaron a implementar con fuerza las políticas económicas neoliberales. De esta manera, los populismos neoliberales de los años 80 y 90 llevaron a cabo un difícil acto de equilibrio entre, por un lado, las expectativas de las masas y por otro, las exigencias de ‘responsabilidad fiscal’ demandadas por poderosos actores internacionales tales como el Banco Mundial y el IMF. Mientras intentaban acallar el clamor de las masas por medio del uso de la retórica populista y la adopción esporádica de medidas en beneficio de los sectores populares, dejaban la conducción de la economía en manos de equipos tecnocráticos que estaban en plena sintonía con el llamado “Consenso de Washington”.

Lo que enseña la experiencia internacional es que la tecnocracia puede desempeñar roles muy diversos e incluso opuestos bajo diversas situaciones históricas y políticas. Si bien en ciertos períodos históricos los tecnócratas efectivamente han apoyado soluciones autoritarias, también se puede comprobar que en otras circunstancias se han convertido directa o indirectamente en actores claves en la preservación y funcionamiento del régimen democrático. Estos múltiples roles de la tecnocracia quedan claramente en evidencia en el caso chileno.

2. **Tecnocracia y gobernabilidad democrática en Chile: Un breve recuento histórico**²

El posicionamiento de la tecnocracia chilena respecto a la democracia y al autoritarismo durante el siglo XX ha seguido los patrones clásicos de comportamiento político de las clases medias de ese país. De esta manera la tecnocracia en este país se ha visto condicionada por su temor permanente a las masas y el caos y su deseo de orden, pero además por su deseo de justicia social y valoración del esfuerzo personal. Así, en el ocaso del régimen oligárquico a comienzos del siglo XX, los tecnócratas se constituyeron en una fuerza de emancipación de las clases medias emergentes, rechazando decididamente los privilegios de cuna y nobleza y alzando la bandera de la meritocracia y el esfuerzo personal.

A partir de fines de los años 30, cuando los sectores medios ya se encontraban afianzados en el poder, la tecnocracia se convirtió en un factor de equilibrio de fuerzas entre, por un lado, los sectores oligárquicos debilitados y, por el otro, los sectores populares emergentes. La tecnocracia no sólo no cedió el paso a estos últimos, sino que dio garantías a los primeros de que los asuntos de Estado serían bien administrados y que la gestión económica no sería politizada. Esto fue especialmente lo que sucedió en el período de los llamados gobiernos radicales de 1938 a 1945. De esta manera, los tecnócratas al interior de las agencias gubernamentales se constituyeron en una suerte de grupo mediador entre las derechas temerosas y desconfiadas y las fuerzas de centroizquierda, para administrar los recursos fiscales del país y las empresas estatales.

Los tecnócratas chilenos han debido operar en un sistema de gobierno muy politizado, a pesar de la existencia en el período 1938-1973 del llamado “Estado de Compromiso”. Se puede argumentar que la existencia misma del compromiso sobre el cual se había construido la democracia chilena fue en parte el resultado de la polarización y la incapacidad de cualquiera de los sectores políticos de imponer su voluntad sobre el resto (ver Valenzuela, 1978; Scully, 1992). Ésta es la razón por la cual durante muchas décadas una marcada división ideológica por partida triple entre la derecha, la izquierda y el centro ha penetrado el sistema político chileno en el cual cada uno de estos sectores controla casi una tercera parte del electorado. Esto es lo que algunos estudiosos han denominado el “patrón de los tres tercios” (Gil, 1966; Drake, 1978). La polarización política alcanzó altos niveles, especialmente en períodos electorales, y se hizo especialmente visible durante las elecciones presidenciales de 1958, 1964 y 1970. Marcelo Cavarozzi llega a la conclusión de que “el consenso alcanzado por las elites

² Las secciones sobre el caso chileno se basan en una serie de trabajos del autor sobre el fenómeno tecnocrático en ese país (en especial, Silva, 1994, 2004, 2006 y 2010).

chilenas durante los años 30 y los años 40 fue bastante tenue. [...] La fragilidad del consenso político chileno se hizo progresivamente más obvia a partir de comienzos de los años 50” (Cavarozzi, 1992: 214). Eduardo Boeninger hace una evaluación de la fragilidad del Estado de Compromiso en términos similares:

“Un conjunto de factores condujo a la paradoja de una fuerte inestabilidad y discontinuidad políticas en el marco del Estado de Compromiso, contribuyendo al desprestigio progresivo de los partidos, la política y las prácticas de negociación y gestación de acuerdos entre las directivas políticas y parlamentarias, fenómeno que se acentuó a medida que se producía el estancamiento económico. En lenguaje contemporáneo, el Estado de Compromiso no se caracterizó por condiciones satisfactorias de gobernabilidad” (1997: 114).

En este polarizado ambiente político, desde fines de los años 30 los tecnócratas chilenos han operado principalmente como una fuerza moderadora. Como resultado de los constantes cambios entre gobiernos de centroizquierda y de centroderecha, el aparato del Estado se vio obligado a buscar apoyo en un cuerpo de tecnócratas relativamente estable. Esto fue también el resultado de la falta de confianza existente entre grupos sociales y políticos. En este contexto, los tecnócratas han constituido, por decirlo así, como una especie de amortiguador o zona intermedia entre grupos que luchan por el poder por su capacidad técnica, aparente neutralidad y apoliticismo. También proporcionaron la muy necesaria continuidad de las políticas de Estado entre administraciones debido a que no eran fácilmente reemplazables. Una de las más notables características de la permanencia de los tecnócratas en las reparticiones de gobierno desde 1927 a 1973 fue su capacidad de supervivencia de un gobierno al otro. Con quizá la única excepción del período de Alessandri Rodríguez (1958-1964) y el régimen militar (1973-1990), durante esos años hubo un excepcional grado de continuidad en el equipo de tecnócratas a cargo de las agencias especializadas del Estado. Los mismos jóvenes ingenieros que llegaron a las reparticiones públicas bajo Ibáñez a fines de los años 20 “sobrevivieron” durante todos los diferentes gobiernos hasta 1958. Lo mismo sucedió más adelante. Un buen ejemplo es Sergio Molina, un tecnócrata que se desempeñó como ministro en tres administraciones diferentes e incluso antagónicas (en la segunda administración de Ibáñez [52-58], bajo Alessandri Rodríguez [58-64] y bajo Frei Montalva [64-70]). Un grado similar de continuidad puede observarse entre las administraciones de Frei Montalva y Allende [70-73]. Luego de la victoria de la coalición de la Unidad Popular en 1970, muchos técnicos demócratacristianos conservaron sus puestos en diferentes instituciones estatales porque el gobierno de Allende no tenía el personal técnico suficiente para manejar todas esas agencias especializadas. Junto a esto, muchos tecnócratas demócratacristianos se habían unido al Movimiento de Acción Popular Unitaria

(MAPU) y a la Izquierda Cristiana,³ partidos de izquierda que finalmente llegaron a formar parte de la coalición de gobierno que apoyaba a Allende. Un claro ejemplo de esto fue Jacques Chonchol, quien poseía credenciales marcadamente tecnocráticas: fue director de la Corporación de la Reforma Agraria durante Frei Montalva y después ministro de Agricultura bajo el gobierno de Salvador Allende.

Cuando el sistema mesocrático se encontró en problemas de supervivencia, como sucedió a fines de los años 50, los tecnócratas (como los de la CEPAL) pasaron a formular reformas económicas y sociales (en especial, la reforma agraria) que tuvieron un impacto emancipador sobre los sectores relegados de la sociedad, como el campesinado y sectores marginales urbanos. Los tecnócratas también se transformaron en los principales agentes en favor de la integración económica regional y luego de la globalización. Era evidente que existían claros móviles políticos tras estas acciones, tales como la activa integración de los sectores sociales postergados al sistema político a fin de conseguir su apoyo en las urnas. Sin embargo, al hacer uso de un discurso técnico y despolitizado, los tecnócratas lograron presentar sus políticas como instrumentos eficientes para transformar a los sectores populares en nuevos consumidores y fortalecer la economía del país.

El hecho de que los tecnócratas hayan conservado sus posiciones claves también se considera como característico de las nuevas democracias que emergen en los años 80. En el caso chileno la tecnocracia da garantías a sectores económicos poderosos, a la derecha política y a los militares. El terreno económico (sobre todo con el trauma de comienzos de los 70) en general se ha “despolitizado”, a la vez que los responsables de las políticas económicas han sido aislados en un capullo que los protege de presiones directas de sectores políticos y sociales (ver Haggard y Kaufman, 1992).

Es evidente que la presencia de tecnócratas en sí no es suficiente para garantizar la estabilidad política y social. Del mismo modo, la sola prosperidad no es suficiente para legitimar a la clase política. Lo que hemos visto en Chile desde mediados de los años 90 es que el desarrollo económico per se y el discurso apolítico no han aportado al parecer una respuesta contundente y permanente a la necesidad de legitimidad política. Por momentos, la gente parece cansarse del discurso tecnocrático, frío e incoloro, como se hizo evidente bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruíz-Tagle a fines de los 90 y alcanzó su punto culminante durante la administración de Michelle Bachelet.

³ El MAPU nace a comienzos de 1969 y está constituido por un sector de jóvenes que abandona el Partido Demócrata Cristiano (PDC) debido a su insatisfacción por la línea cada vez más conservadora adoptada por el gobierno de Eduardo Frei. La Izquierda Cristiana (IC) surge en 1971 cuando un grupo de demócratacristianos abandona el PDC debido a la creciente posición confrontacionista adoptada por ese partido ante el gobierno de Salvador Allende.

Lo más relevante de todo es que esto no implica que la gente quiera regresar a fórmulas politizadas, sino que la sociedad de consumo y de masas que ha producido el modelo neoliberal en Chile ha creado una demanda pública por un mensaje político más ajustado a la mercadotecnia, en el cual el apoliticismo se combine con temas valóricos y participativos (Tironi, 2005).

Por lo tanto, mi argumento central para el caso chileno es que en vez de haber constituido una amenaza para la democracia, los tecnócratas han sido un actor destacado en la consolidación del régimen democrático a partir de la crisis de los años 30, sobre todo en la generación y funcionamiento del llamado Estado de Compromiso desde fines de los 30 hasta comienzos de los años 70. Junto a esto, los tecnócratas han sido actores centrales en las reformas económicas y sociales de la llamada “década de las reformas” bajo Frei Montalva y Allende (1964-1973).

Por consiguiente, durante el Estado de Compromiso, los gobiernos en Chile persiguieron claras metas políticas y sociales con sus políticas. Esto, sin embargo, estuvo acompañado de la presencia de tecnócratas que supuestamente defendían el enfoque técnico y apolítico de los problemas del día. Su presencia en los más altos puestos de las reparticiones públicas inspiraba confianza entre las fuerzas de oposición de derecha. Al proporcionar la ya mencionada zona de amortiguación al sistema, los tecnócratas indirectamente hicieron una muy importante contribución al funcionamiento de la democracia chilena entre 1938 a 1970. Esto constituye en mi opinión una de las principales paradojas del rol político que los tecnócratas desempeñaron en Chile; concretamente, que ellos, que detestaban la política y a los políticos hubieran estado finalmente entre los principales facilitadores –no deliberadamente, pero de hecho– que hicieron posible que la democracia chilena previa a 1973 haya funcionado.

Durante el gobierno militar los tecnócratas neoliberales fueron parte del llamado sector “blando” (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1986) dentro del régimen. Ellos urgieron a las autoridades militares a redactar una Constitución y a operar dentro de la ley. Los Chicago Boys estaban muy preocupados de las crecientes amenazas de boicot a los productos chilenos por las confederaciones de trabajadores portuarios en Estados Unidos y Europa, debido a las continuas violaciones a los derechos humanos en el país. Además estaban conscientes de la necesidad de alguna forma de legalidad, incluyendo el respeto a los acuerdos internacionales.

Durante la fase final del régimen de Pinochet, los tecnócratas neoliberales dieron la impresión de estar más preocupados de la continuidad del modelo económico en la futura era democrática que de dar la pelea para que el régimen autoritario continuara.

Para las elecciones generales de 1989, Hernán Büchi, el exitoso ministro de Hacienda de Pinochet, fue el candidato presidencial propuesto por las fuerzas de derecha (Rojas, 1989). Büchi, sin embargo, mostró una posición errática al declarar que estaba atormentado por una “contradicción vital” al aceptar dicha candidatura debido a que no tenía ninguna afinidad con la política (Angell, 2007: 41). La actitud más bien pasiva adoptada por Büchi durante su campaña presidencial –al no criticar firmemente la oposición democrática ni defender en forma convincente los logros del gobierno militar– indica, en mi opinión, que él, como muchos otros Chicago Boys, ya no consideraban que el régimen de Pinochet era necesario para la supervivencia del nuevo modelo económico. De hecho, los tecnócratas neoliberales estaban convencidos de que, una vez que las masas hubieran aceptado los principales postulados neoliberales (reducción del Estado, respeto sagrado por la propiedad privada, el consumo como la recompensa del esfuerzo individual, etcétera), sería posible restaurar el gobierno democrático. Y era evidente que a fines de los 80 el modelo económico neoliberal se había consolidado en Chile. Por otra parte, muchos líderes de la oposición ya habían declarado que no tenían intención de introducir cambios fundamentales en la economía de mercado de Chile en el futuro inmediato (ver Ominami, 1991).

Más evidente se hace la relación positiva de la tecnocracia con la democracia en Chile tanto durante el período de transición como en los años de la Concertación desde 1990. Mi argumento es que los grupos tecnocráticos (tanto del gobierno como de la oposición) se constituyeron en voceros y mediadores al canalizar el diálogo entre sectores del gobierno militar y los sectores moderados de la oposición. Allí los institutos privados y centros de estudio tuvieron un rol de singular importancia. Limitaron los recelos de políticos y tradujeron a un lenguaje técnico los puntos de encuentro y desencuentro (ver Puryear, 1994). El uso de un lenguaje profesional semejante (Gouldner, 1979), en la relación entre “colegas”, (sobre todo en el caso de economistas como Foxley, Büchi, etcétera), facilitó el tranquilizar los temores y las sensaciones de amenaza mutua entre el régimen militar y los líderes de la oposición democrática.

Todo parece indicar que a partir de fines de la década del 90 la ideología tecnocrática se ha mezclado con la idea democrática en Chile, con lo cual se ha ido constituyendo un régimen democrático “tecnocratizado” y crecientemente despolitizado, en la cual los problemas sociales tienden a ser traducidos a términos técnicos y enfrentados a través de políticas públicas de corte tecnocrático.

3. La tecnocracia como facilitadora de la transición democrática en Chile

El debate sobre la naturaleza de los regímenes burocrático-autoritarios que se establecieron a mediados de los años 60 y a comienzos de los 70 arroja bastante luz sobre la estrecha alianza que se forjó en aquellos años entre los tecnócratas civiles y los militares. Como ya se indicó anteriormente, en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay los tecnócratas tuvieron un rol fundamental en la administración de la economía durante los gobiernos militares. Pero lo que es excepcional en el caso chileno es que el equipo económico no circunscribió su accionar a los dominios estrictamente económicos y financieros. A medida que transcurría el tiempo los Chicago Boys fueron expandiendo su influencia y autoridad a todas las esferas de la sociedad incluyendo educación, salud, el sistema de pensiones y cultura. Lo que es más importante es que estos tecnócratas neoliberales a la larga evolucionaron y llegaron a estar entre los principales ideólogos del régimen militar ya que trataron de justificar la coexistencia del autoritarismo político con el liberalismo económico. En otras palabras, finalmente se transformaron en “tecnopolíticos” a toda prueba.

Al final del gobierno de Pinochet se había hecho evidente que la visión tecnocrática de los Chicago Boys había logrado trascender el grupo que la originó y alcanzar un estatus hegemónico en la sociedad al convencer no sólo a los militares y otros sectores de derecha sino también, a importantes sectores de profesionales e intelectuales que se oponían al régimen militar. Esto explica en parte por qué los gobiernos de la Concertación también adoptaron estilos claramente tecnocráticos después del fin de la era autoritaria. Así, el rol cada vez más político de los tecnócratas a partir de 1973 no fue en absoluto un fenómeno confinado exclusivamente a los círculos gubernamentales. Esta tendencia también se puede observar en los cuarteles de la oposición, donde existía una creciente tecnocratización en la formulación y aplicación de estrategias. Desde 1973 se habían establecido una serie de institutos de investigación (de oposición) y organismos no gubernamentales (ONGs) que desempeñaron un papel clave en la lucha contra el régimen autoritario. En 1985, por ejemplo, había alrededor de cuarenta institutos privados de investigación en ciencias sociales que empleaban a 543 investigadores (sin incluir asistentes de investigación y becarios), de los cuales el 30 por ciento había hecho su maestría o doctorado en el extranjero. Alrededor del 65 por ciento de estos investigadores estaba contratado a tiempo completo. El impacto de estos institutos en la producción académica nacional fue inmenso. Durante esos años, con la excepción de los temas económicos, la mayoría de los artículos y libros relacionados con las ciencias sociales escritos por académicos chilenos publicados en Chile y en el extranjero fueron obra de investigadores asociadas a estos institutos privados. Así, por ejemplo, en 1980-1984 un total de 101 libros fueron publicados por trece institutos de investigación privados que contaban con programas regulares de publicación (Brunner, 1986). Esta profesionalización de la oposición política fue, en mi opinión, el resultado de varias dinámicas políticas y

sociales que comenzaron a operar tras el colapso de la democracia en 1973, tales como la experiencia del exilio, la academización de muchos líderes políticos, y la aparición de muchos institutos privados y centros de investigación dirigidos por fuerzas de la oposición.

Inmediatamente tras el golpe de Estado el nuevo gobierno inició una encarnizada persecución de los intelectuales. Muchos de ellos fueron encarcelados o asesinados por los militares, mientras que un grupo mayor se dispersó por todo el mundo como exiliados políticos (ver Kay, 1987). Muchos académicos chilenos exiliados en el extranjero encontraron una nueva vida en la docencia, la investigación, o haciendo cursos de postgrado en sus nuevos países de residencia. Otros, con el apoyo de las autoridades locales y organizaciones políticas, crearon sus propios centros de investigación dedicados al análisis de la realidad chilena.

Lo que es importante destacar aquí es el hecho de que muchos dirigentes políticos (los políticos profesionales, que en Chile habían vivido de los recursos del partido) se vieron a menudo obligados por las circunstancias a incorporarse a los círculos académicos. Aunque la mayoría de ellos tenían formación académica (principalmente en derecho, sociología o economía), no habían trabajado como académicos, o sólo lo habían hecho por un tiempo muy breve. En muchos casos, las nuevas experiencias académicas influenciaron su visión política o, al menos, cambiaron su “estilo político”. Se tornaron más académicos y tecnocráticos, y se involucraron más con los nuevos debates teóricos que se desarrollaban en el mundo. Muchas de estas figuras políticas aprendieron por primera vez a trabajar (y a alcanzar objetivos comunes), con personas que no compartían su visión filosófica y política. Esto sucedía después de haber vivido durante muchos años en semi-guetos dentro de los estrechos confines de sus propias organizaciones políticas.

Los políticos e intelectuales que pudieron permanecer en Chile fueron expulsados de las universidades y las instituciones públicas en las que habían trabajado. Por primera vez, a los intelectuales chilenos se les cortó de manera radical su fuente tradicional de ingresos: el Estado. Su segunda fuente de subsistencia, los partidos políticos (que a la vez también se mantenían con los recursos del Estado), también fueron atacados por las fuerzas de seguridad. La represión de los intelectuales produjo una gran dispersión con cada uno literalmente luchando por su propia vida y subsistencia. Sin embargo, después de un par de años muy represivos, comenzó un difícil proceso de reagrupamiento y reorganización. Los intelectuales de disciplinas académicas similares y con visiones políticas que congeniaban comenzaron a establecer institutos de investigación como una manera de sobrevivir (en términos de ingresos). Eran

financiados principalmente por organizaciones de cooperación internacional de Europa Occidental y Norteamérica como una forma de mantener viva una intelectualidad que se oponía al totalitarismo militar. Algunos de estos institutos de vez en cuando también recibían fondos de los partidos políticos chilenos en el exilio.

El estatus académico de estos institutos y el contenido académico de sus actividades constituyeron en un inicio su único “derecho a existir” dentro de un ambiente extremadamente represivo. Cualquier crítica al gobierno militar debía ser formulada cuidadosamente en términos académicos y presentada de una manera abstracta. Esto condujo a la casi total desaparición de los eslóganes y de la retórica que había caracterizado a los partidos políticos antes del golpe.

En 1975 la Iglesia Católica fundó la Academia de Humanismo Cristiano (AHC), para garantizar la personería jurídica de los diversos centros de investigación y para protegerlos de la represión directa del Estado. Además se crearon nuevos centros de investigación bajo el alero de la AHC para albergar a académicos que eran perseguidos y supervisar las políticas aplicadas por el gobierno militar en distintos ámbitos (legislación laboral, política agraria, educación, derechos humanos, etc.).

Muchos de los institutos de investigación inicialmente tolerados por los militares tenían una orientación Demócrata Cristiana y, se especializaban básicamente en temas macroeconómicos y financieros. Desde mediados de 1974 el Partido Demócrata Cristiano—que inicialmente había apoyado el golpe de Estado y había ofrecido asistencia técnica al gobierno militar—comenzó a moverse hacia la oposición. Los académicos demócratacristianos que continuaban en las universidades fueron presionados por las fuerzas gremialistas y neoliberales para renunciar a sus puestos. Tal fue el caso de los miembros del Centro de Estudios y Planificación Nacional (CEPLAN), un instituto asociado a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica. CEPLAN se formó en 1970 como una alternativa a los Chicago Boys cuando estos adquirieron una posición dominante en esa universidad. En 1976 los académicos de CEPLAN decidieron romper sus vínculos con la Universidad Católica y establecerse como un instituto privado bajo el nuevo nombre de Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina (CIEPLAN).

Este instituto de investigación se concentró en monitorear la política económica de los Chicago Boys. Paradójicamente, la primera oposición (tolerada) al gobierno militar y a la tecnocracia neoliberal vino de este grupo de tecnócratas, que eran expertos en cuestiones financieras y macroeconómicas. Este equipo de académicos altamente calificados aceptó el desafío neoliberal (“el tema de la política económica sólo puede

ser tratado por especialistas”) y comenzó a elaborar estudios técnicos muy sofisticados, donde expresaban sus críticas a la política económica del gobierno militar (ver Foxley, 1983). El tono académico utilizado por muchos institutos de investigación de oposición en sus críticas al neoliberalismo hicieron posible la difusión de sus ideas (aunque de manera limitada) a través de la publicación de documentos de trabajo y la organización de simposios académicos sobre cuestiones específicas. Durante muchos años, ésta constituyó la única forma autorizada para la difusión de ideas distintas de las oficiales (Cavallo, 1992: 146).

Al cabo de un par de años, CIEPLAN se convirtió en un verdadero think tank del Partido Demócrata Cristiano. Sus actividades se expandieron desde el seguimiento de las políticas económicas a la elaboración de propuestas para un modelo socioeconómico alternativo y un nuevo sistema político que sería adoptado tras la esperada salida de los militares. Además, los “Monjes” de CIEPLAN comenzaron a ocupar los pocos espacios abiertos a la prensa independiente para difundir sus ideas y críticas a un público más amplio, a través de la publicación de artículos y comentarios en Mensaje (de propiedad de la Iglesia Católica), y más tarde en Hoy, el primer semanario de oposición autorizado (de orientación demócrata cristiana). En los últimos años del gobierno militar Alejandro Foxley, director de CIEPLAN, se convirtió en una figura pública muy conocida, quien apoyado por su experiencia económica, se aventuró con éxito en el campo de las ciencias políticas y, en particular en el estudio del consenso político (Foxley, 1986; 1989; 1993).

También la sede de FLACSO Chile jugó un rol fundamental en la articulación de una sólida crítica académica a la naturaleza autoritaria del régimen político y sobre las consecuencias sociales, políticas y culturales de la aplicación del modelo neoliberal por parte del gobierno de Pinochet. Junto a esto, los investigadores de FLACSO hicieron grandes esfuerzos en formular políticas sectoriales (en el campo de la educación, vivienda, salud, desarrollo social, defensa y relaciones exteriores) para el período post-autoritario (cf. Garretón, 1989). Estos esfuerzos intelectuales fueron muy útiles ya que a menudo constituyeron posteriormente la base sobre la cual se formularon las diversas políticas públicas durante el período de la Concertación.

A partir de 1983, el espacio para la actividad política se amplió, y los académicos asociados a varios centros de investigación controlados por la oposición democrática comenzaron a criticar más abiertamente al régimen de Pinochet. De esta manera, se crearon nuevos mecanismos de cooperación y consulta entre académicos e intelectuales asociados a distintos institutos de investigación. Esto fue iniciado por expertos en temas específicos que tenían puntos de vista políticos similares (en su mayoría miembros del mismo partido político). A través de la organización de

reuniones periódicas y talleres, estos colectivos profesionales (los llamados equipos técnicos) elaboraron un diagnóstico común de la situación existente en un campo específico, y formularon propuestas para ser implementadas después de la esperada restauración de un gobierno democrático. De esta manera, un grupo de economistas de orientación socialista trabajó durante muchos años en un esfuerzo por formular una nueva política económica, que posteriormente fue adoptada por el Partido Socialista como su nuevo programa económico oficial. Lo mismo hicieron los demás partidos políticos también en otras áreas como vivienda, seguridad social, salud, defensa, agricultura, educación, política exterior, y así sucesivamente. Esta tecnocratización de la formulación de políticas partidistas se vio facilitada por el hecho de que, en ese momento, la consulta abierta a militantes de partidos opositores por medio de un congreso era impensable por razones de seguridad.

En 1984 la Democracia Cristiana, junto con el ala moderada del Partido Socialista y otras organizaciones políticas menores de la centro-izquierda, formaron la Alianza Democrática, una coalición de oposición que pretendía derrotar al gobierno militar por la vía política en un plebiscito a realizarse dentro de unos años. Según la Constitución de 1980, se debía celebrar un referéndum nacional antes de fines de 1988. La gente debía elegir entre prolongar el gobierno de Pinochet hasta 1997 (la opción por el “sí”) o celebrar de elecciones libres dentro de un año después del referéndum (la opción por el “no”).

La campaña por el “no” dio lugar a una cooperación muy fructífera entre los diferentes equipos técnicos de los partidos políticos de esta coalición. Por primera vez en la política chilena moderna, los tecnócratas de centro y de la izquierda trabajaron conjuntamente para formular un programa político común y elaborar políticas sectoriales para un futuro gobierno democrático. Este ejercicio fue especialmente fructífero por dos razones. En primer lugar, eliminó, o por lo menos redujo, los temores y prejuicios históricos que existían entre ambos sectores políticos. Esto se vio facilitado por el hecho de que compartían enfoques técnicos y profesionales similares y en muchos casos habían estudiado en los mismos centros académicos tanto en Chile como en el extranjero. Esta cooperación en la cúpula tecnocrática contribuyó fuertemente al inicio del acercamiento de las bases de los diferentes partidos, las cuales por muchas décadas habían formado parte de subculturas políticas separadas e incluso antagónicas. En segundo lugar, la existencia de estos equipos técnicos multipartidistas facilitó en gran medida la formulación de un programa de gobierno coherente para las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 y la subsiguiente formación de equipos técnicos multipartidistas para ocupar cargos en ministerios y agencias estatales tras la victoria electoral. De esta manera, muchos tecnócratas de los diferentes partidos políticos que fueron designados para ocupar cargos oficiales

después de la instalación del gobierno de Patricio Aylwin en marzo 1990 ya habían trabajado juntos durante más de siete años

4. Tecnocracia y gobernabilidad democrática bajo los gobiernos de la Concertación

La evolución política de Chile desde la restauración democrática de 1990 constituye un excelente ejemplo de cómo la democracia puede coexistir con grupos tecnocráticos que ocupan cargos claves en el gobierno. La actual democracia chilena no sólo “tolera” la presencia de los grupos tecnocráticos, sino que dichos grupos parecieran haber desempeñado un papel fundamental para facilitar la exitosa consolidación de altos niveles de gobernabilidad y convivencia democrática en este país.

El papel fundamental desempeñado por los tecnócratas en los cuatro gobiernos de la Concertación en el período 1990-2010 se vio facilitado por la existencia de una especie de “empate político”, entre las fuerzas de centro-izquierda en el gobierno y una fuerte oposición de derecha, incluyendo a la comunidad empresarial y las instituciones militares. Esta situación muestra muchas similitudes con el escenario político existente a fines de la década del 30 que obligó a las distintas fuerzas políticas a llegar a una suerte de acuerdo básico sobre las reglas del juego que facilitaría el funcionamiento del Estado de Compromiso (Loveman, 1979). Ya en la transición de los años 1988-1990, la oposición democrática trató de calmar a los sectores empresariales que temían que la restauración democrática conduciría a la eliminación de la economía de libre mercado y a una repolitización total de las políticas públicas (Tulchin y Varas, 1991). Las fuerzas democráticas se encontraban en una difícil situación, ya que se enfrentaban a militares conscientes de sus actos, visiblemente orgullosos de la modernización del país y del desarrollo económico alcanzado durante el gobierno de Pinochet y a una fuerte y extremadamente asertiva comunidad empresarial que no estaba dispuesta a observar pasivamente la destrucción de la “obra” del gobierno de Pinochet (Montero, 1997). El hecho es que la derecha y el gobierno militar todavía eran capaces de generar apoyo entre una parte considerable de la población chilena, ya que este sector obtuvo un 43 por ciento de los votos en el plebiscito de 1988 y un 44,8 por ciento en las elecciones presidenciales de 1989. En el período 1990-2010 el apoyo electoral a los candidatos de derecha a la presidencia fue aumentando gradualmente. Con anterioridad al triunfo de Piñera en 2010, los candidatos presidenciales de la derecha estuvieron a punto de ganar las elecciones en dos ocasiones. Además, desde 1990, los sectores de derecha pudieron contar con una cómoda mayoría en el Congreso debido a la inclusión de los “senadores designados” y

la introducción de una ley electoral binominal que beneficiaba a las fuerzas de derecha (Angell, 2007).

En este escenario en particular, la coalición de la Concertación se vio casi obligada a “desmilitarizar” la política económica, poniéndola en manos de economistas de renombre con credenciales tecnocráticas. De esta manera, tal como sucedió a fines de la década del 30, la presencia de tecnócratas competentes encargados de las decisiones económicas y financieras del gobierno constituyó una valiosa garantía para la comunidad empresarial, el ejército y la derecha política en general, de que la coalición concertacionista no introduciría cambios fundamentales en el modelo económico (Giraldo, 1997). Sin embargo, este relativo “equilibrio de fuerzas” alcanzado entre la centro-izquierda y la derecha desde fines de los años 80 no es el único factor importante que explica por qué las fuerzas de la Concertación adoptaron fórmulas tecnocráticas. Lo que, en mi opinión, ha sido aún más importante para facilitar la fuerte presencia tecnocrática en la era democrática ha sido el largo y doloroso proceso de “aprendizaje político” de los líderes de la Concertación respecto a las causas del quiebre del régimen democrático en 1973. Tras años de análisis retrospectivos muchos de ellos llegaron a la conclusión de que un factor vital en la caída de Allende y en la destrucción de la gobernabilidad democrática en el país fue la extrema politización de las agencias estatales, que obstaculizaron la aplicación de políticas racionales y coherentes. Por lo tanto, creo que la tecnocratización de la gestión económica del gobierno durante los años de la Concertación no solo fue el resultado de un oportunismo político, sino que de una serie de profundas lecciones que dejó el período de la Unidad Popular.

Los gobiernos de la Concertación enfrentaron constantemente la tensión entre sus objetivos de una alta tasa de crecimiento económico y una administración eficiente del Estado, por una parte, y la necesidad de incentivar la participación ciudadana por la otra. Lo que revela el caso chileno es que un notable éxito en los ámbitos social y económico (fuerte reducción de la pobreza, altos niveles de crecimiento económico y prosperidad, etc.) no necesariamente legitima las estructuras tecnocráticas que contribuyeron a dicho éxito. La creciente demanda de participación, que se manifestó durante el gobierno de Bachelet, obligó a las autoridades a buscar mecanismos de consulta que combinaran la lógica tecnocrática con ciertos espacios para la representación de la sociedad civil (Borzutzky y Weeks, 2010).

El triunfo de la coalición de la Concertación en las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 marcó el comienzo de una nueva era en la historia política de Chile. Desde la instalación del gobierno de Aylwin en marzo de 1990, la sociedad chilena ciertamente ha experimentado profundas transformaciones en los ámbitos

socioeconómico, político, institucional, e incluso cultural. Sin embargo, pese a estos cambios la naturaleza claramente tecnocrática de la toma de decisiones gubernamentales en lo económico, financiero y administrativo ha sido una característica constante de todos los gobiernos de la Concertación. Se puede decir que los gobiernos concertacionistas de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), y Michelle Bachelet (2006-2010) privilegiaron la formación de poderosos equipos tecnocráticos a cargo de las políticas económicas. Estos gobiernos también adoptaron, en diferente medida, un discurso tecnocrático basado en la modernización de la economía y el sector público, la búsqueda de la eficiencia, y un gobierno “de los mejores”. Los objetivos de la Concertación de simultáneamente lograr el crecimiento económico y la estabilidad financiera, por una parte, y reducir la desigualdad social en el país por la otra (contenida en su eslogan “crecimiento con igualdad”) tensaron constantemente las relaciones entre los tecnócratas y los políticos al interior del bloque de gobierno.

La figura del Presidente de la República desempeña un rol decisivo en el grado de poder e influencia que ejercen los tecnócratas en el gobierno. Éste es especialmente el caso en Chile, donde existe una fuerte tradición presidencialista. Para comprender la decisión de ciertos presidentes de rodearse de tecnócratas y a veces darles su apoyo decidido (o retirárselo), se tiene que incorporar al análisis la difícil relación existente entre el presidente y los partidos políticos que lo apoyan.

No cabe duda que los presidentes a menudo nombran a ministros u otros colaboradores con perfiles marcadamente tecnocráticos, con el objeto de disminuir la capacidad de presión sobre su gestión y sus políticas por parte de los partidos políticos que lo llevaron al poder. Es decir, se puede decir que a menudo los tecnócratas conforman un amortiguador entre el Presidente y los partidos políticos. Además se parte del supuesto de que los tecnócratas serán capaces de formular y aplicar políticas de Estado con una visión de largo plazo y conseguir resultados exitosos, independientemente de la presión o la oposición de ciertos círculos partidarios a estas políticas. En cambio, la presencia de ministros y colaboradores de sello marcadamente político, implicaría la defensa de intereses políticos estrictamente partidistas que no siempre coincidirían con los intereses del gobierno en su conjunto. En otras palabras, su presencia afectaría la cohesión interna del gobierno, restándole efectividad a la gestión gubernamental.

Durante la era de la Concertación, cada presidente tuvo sus propios motivos y razones para incorporar tecnócratas al círculo interior de gobierno.

Patricio Aylwin entendía perfectamente que su gobierno era uno de transición y que debía velar tanto por la estabilidad política como por el bienestar económico, ya que había muchas incertidumbres sobre el devenir del país tras la recuperación de la democracia. Se temía que se pudiera iniciar un penoso ciclo de conflictos políticos y sociales, asociado a un empeoramiento de la situación económica, lo que podría resultar en el quebrantamiento de la gobernabilidad y convivencia democrática en Chile. El primer gobierno de la Concertación se empeñó en demostrar que era más capaz que la dictadura de manejar el ámbito político, crear grandes consensos nacionales y aumentar aún más el crecimiento económico y el bienestar del país. Para generar garantías y confianza en todos los sectores del país—incluyendo a la clase empresarial, los partidos de derecha y las fuerzas armadas—Aylwin optó por gobernar por sobre los partidos, sin darles una influencia muy directa y visible en su administración. Su grupo de colaboradores más cercanos no se caracterizaba por su orientación política sino que por su gran prestigio profesional. Además, este grupo logró implementar una perspectiva profesional y tecnocrática que marcó el rumbo de los futuros gobiernos de la Concertación.

Durante el gobierno de Aylwin los partidos de gobierno también comprendieron la importancia de contar con ese núcleo de tecnócratas en puestos claves, dado que una excelente gestión de gobierno garantizaría la consolidación del régimen democrático—y de la Concertación como coalición de gobierno—durante un largo tiempo. Lo que se observa claramente es que durante el gobierno de Aylwin existió una provechosa “división del trabajo” entre tecnócratas y políticos concertacionistas. Mientras los primeros se encargaron de la tarea de demostrar la eficiencia económica y la buena administración de las instituciones estatales, los políticos se encargaban de lidiar con una serie de complicados temas heredados de la dictadura, tales como los derechos humanos y las relaciones cívico-militares. El buen trabajo del equipo tecnocrático de gobierno aglutinó a sus miembros a pesar de pertenecer formalmente a diferentes partidos políticos. Esto dio origen a lo que se ha llamado el “partido transversal”, en el cual la ideología tecnocrática y liberal fue el común denominador.

El segundo presidente de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, privilegió en un primer momento el fortalecimiento del equipo político, a pesar de que él, por su formación profesional de ingeniero y por convicción, era partidario de seguir un camino más tecnocrático. Esto se debió a que se esperaba un resurgimiento de las demandas sociales y salariales de los sectores más postergados (Muñoz y Stefoni, 2003). Durante el gobierno de Aylwin el mundo sindical había mantenido una escrupulosa tregua con el gobierno para así facilitar la transición y mantener la estabilidad política y social en el país. Sin embargo, al finalizar el gobierno de Aylwin,

Chile presentaba un panorama de mucha estabilidad política y sobre todo una considerable bonanza económica. De esta manera, todo parecía indicar que se iniciaría una ola de demandas sociales que debían ser manejadas por figuras con influencias políticas que estuvieran en buenos términos con la dirigencia de los movimientos sindicales y sociales. Sin embargo, la esperada agitación social finalmente no llegó y rápidamente Frei Ruiz-Tagle pasó a concentrar sus esfuerzos en lograr un mayor grado de internacionalización y modernización de la economía chilena, lo que estaba entre sus principales objetivos. Para esto, le abrió el paso a un nuevo grupo de tecnócratas, los llamados los “Top Ten”, quienes por un tiempo tuvieron un lugar privilegiado y mucha influencia en las decisiones estratégicas del Presidente. Esta ascendencia tecnocrática, sin embargo, causó gran resentimiento en el “Círculo de Hierro” constituido por viejos políticos, quienes declararon una guerra sin tregua a los “Top Ten”, logrando finalmente que Frei Ruiz-Tagle se distanciara de ellos.

Ricardo Lagos, el tercer presidente de la Concertación, mantuvo siempre una fuerte desconfianza hacia los tecnócratas, con quienes tuvo varios desencuentros durante su período como ministro en el gabinete de Frei Ruiz-Tagle. Debido a sus credenciales socialistas, el triunfo de Lagos creó gran incertidumbre entre los sectores empresariales y financieros (Funk, 2006). Por esta razón, Lagos se aseguró de dar inequívocas señales de confianza al nombrar a Nicolás Eyzaguirre—un tecnócrata que contaba con el beneplácito de la comunidad financiera—como su flamante Ministro de Hacienda. Sin embargo, el círculo más cercano a Lagos era un grupo de sociólogos con quienes mantenía una amistad de larga data, y a quienes instaló cerca de su despacho presidencial en el Palacio de la Moneda.

La llegada al poder de Michelle Bachelet en 2006 produjo un nuevo escenario respecto a la posición del Presidente hacia los tecnócratas. Lo paradójico de esto es que la candidata presidencial concertacionista desplegó un marcado discurso anti-tecnocrático durante su campaña y al final terminó nombrando al gabinete más tecnocrático que haya tenido Chile desde la restauración de la democracia en 1990 hasta ese momento (Silva, 2010). Para entender esta situación hay que mirar la difícil relación que mantuvo la candidata con las dirigencias políticas de los partidos de la Concertación con anterioridad a su triunfo. Como ya se indicó, ella siempre estuvo ajena a las cúpulas políticas y su candidatura se produjo principalmente por el gigantesco apoyo que su persona suscitaba en la opinión pública en general y no contar con el decidido apoyo de los propios partidos de la Concertación. Bachelet deseaba mantener una distancia y relativa independencia de las cúpulas políticas, por lo que decidió reclutar a sus principales colaboradores fuera de las estructuras partidistas, recurriendo a un selecto grupo de tecnócratas reunidos en el think tank

“Expansiva”. A partir ese momento los funcionarios de gobierno provenientes de Expansiva fueron sistemáticamente criticados por las dirigencias políticas al interior de la Concertación, que exigían poner fin al imperio de la tecnocracia. Sobre todo, la llamada rebelión estudiantil de los pingüinos (estudiantes secundarios) en 2006, el fracaso del sistema de transporte público (Transantiago) puesto en marcha en febrero de 2007 y la negativa del equipo económico de aumentar sustancialmente el gasto social a raíz de los grandes ingresos obtenidos por el país por el alza en el precio del cobre, gatillaron una abierta crítica a los tecnócratas de Expansiva, principalmente concentrada en su líder, el Ministro de Hacienda Andrés Velasco. El líder del equipo económico argumentaba que dichos debían ser reservados para tiempos futuros, cuando bajaran nuevamente los precios mundiales de las materias primas. El desencadenamiento de la crisis mundial a partir de septiembre de 2008 dejó para muchos chilenos en claro que la decisión de Velasco había sido la correcta. El ministro y su equipo económico recibió una aclamación generalizada de la población ya que la medida mostrada en el gasto de los recursos generados por el cobre en el período anterior dejaba ahora al país en una excelente posición para enfrentar los azotes de la crisis. La popularidad de Velasco y de la Presidenta Bachelet aumentó aún más cuando el gobierno cumplió su promesa de expandir el gasto social en tiempos de ‘vacas flacas’. Efectivamente, a partir de ese momento el gobierno de Bachelet comenzó a implementar una vasta gama de programas sociales dirigidos a generar empleo y a mitigar los efectos de la crisis entre los sectores sociales más necesitados. De esta manera, y a pesar de la creciente crítica generada al interior de la izquierda concertacionista, Bachelet siguió apoyando a su Ministro de Hacienda quien hizo subir fuertemente el grado de popularidad del gobierno ante la gran mayoría de la población.

Reflexiones finales

Mirando en retrospectiva, la tecnocracia en América latina se ha convertido en los últimos 30 años en una suerte de chivo expiatorio a la cual se le han achacado la mayoría de los males del performance político y económico de las nuevas democracias. De esta manera, los equipos económicos pasan a menudo a ser responsabilizados casi por completo por los magros resultados económicos obtenidos por la mayoría de las economías latinoamericanas durante la era neoliberal e incluso por la falta de estabilidad política. Si bien obviamente los estamentos tecnocráticos cargan con su cuota de responsabilidad en la calidad de su gestión económica, también se puede argumentar que han sido principalmente los miembros de la clase política y los partidos políticos tradicionales los que más han contribuido a debilitar las nuevas democracias latinoamericanas surgidas a partir de la década del 80. Son muchos los casos de corrupción y desgobierno por parte de presidentes que en este período han

hecho estremecer los cimientos del nuevo orden democrático y atentando así seriamente en contra de la gobernabilidad y la convivencia democrática. También el fuerte debilitamiento experimentado por los partidos políticos durante los últimos 30 años ha llevado a una peligrosa fragmentación de las ofertas electorales y estimulado la emergencia de líderes populistas que a menudo han hecho justamente del enfrentamiento total e intransigente en contra de sus adversarios una de sus principales banderas de lucha. Esto ha resultado en el enrarecimiento y polarización del clima político al interior de muchos países, lo que ha afectado negativamente los niveles de estabilidad política, el funcionamiento de la economía y de la tranquilidad social, es decir, las principales variables que determinan la gobernabilidad y la convivencia democrática. De esta manera, ha quedado demostrado que tampoco los actuales gobiernos neopopulistas de la región, los cuales se han declarado enemigos de la tecnocracia neoliberal, han sido capaces de elevar los índices de gobernabilidad democrática en sus respectivas naciones.

El problema en América Latina no pareciera ser si se requiere de más o menos tecnocracia para llegar a niveles más satisfactorios de gobernabilidad democrática. Lo que más bien existe es un gran déficit en el logro de consensos fundamentales que permitan el mantenimiento de la estabilidad política, el logro de progreso económico y el mejoramiento del bienestar social de la población. Efectivamente, aún pareciera estar lejos el momento en que entre las principales fuerzas políticas y sociales de cada país surja un consenso y compromiso básico de respetar las reglas del juego democrático en todo momento, y sobre todo de llegar a un acuerdo fundamental sobre qué tipo de modelo de desarrollo adoptar para lograr el bienestar económico y social en sus países.

Como lo demuestran las naciones más prósperas y con mayor grado de gobernabilidad democrática del planeta, la estabilidad política y económica se logra cuando la clase política y los estamentos tecnocráticos logran un consenso básico en torno a cuales son sus funciones y atribuciones en la democracia moderna. Como lo han establecido todos los grandes autores de la teoría democrática, la democracia necesita de partidos políticos fuertes y bien organizados que sean capaces de formular propuestas políticas, económicas y sociales serias ante el electorado. Pero las democracias modernas también requieren de una administración seria y profesional de la economía y de las finanzas, que ayude a generar la necesaria confianza por parte de los agentes económicos nacionales e internacionales para invertir y estimular la actividad productiva. En otras palabras, se requiere de un régimen de cooperación entre políticos profesionales y tecnócratas, para edificar un sólido sistema político pluralista y una buena administración del Estado que responda adecuadamente a las exigencias políticas, económicas y sociales que permitan el logro de altos niveles de gobernabilidad y convivencia democrática.

El caso chileno ha demostrado que es posible lograr un consenso básico en torno a respetar las reglas del juego democrático hasta las últimas consecuencias, incluyendo el respeto al estado de derecho y a todas las instituciones democráticas. Además, Chile ha logrado llegar a un virtual consenso nacional en torno a la política de desarrollo basada en una combinación de políticas de mercado con sólidas políticas sociales (“crecimiento con equidad”) que han sabido garantizar la legitimidad del sistema y la gobernabilidad democrática.

Una de las virtudes de la Concertación durante el período 1990-2010 fue justamente el haber sabido combinar – no sin problemas y tensiones – la labor de la clase política con el trabajo especializado del cuerpo de tecnócratas en materia de política económica y formulación de políticas públicas. Fue justamente esa combinación que dio a los gobiernos de la Concertación continuidad programática en el tiempo. El declive de esta coalición se produjo cuando los llamados sectores ‘autoflajelantes’ (críticos ante el curso neoliberal de la Concertación) se empeñaron en destruir la posición de los tecnócratas dentro del conglomerado oficialista, no dándose cuenta que con esto estaban destruyendo uno de los principales pilares que habían sustentado la labor de gobierno. A lo anterior hay que agregar la emergencia de una serie de políticos “díscolos” que empezaron hacer oposición al gobierno desde el interior de la Concertación.

En mi opinión, lo que la gente castigó en las elecciones presidenciales de enero de 2010 y que llevó al candidato de derecha Sebastián Piñera al poder no fue la presencia tecnocrática al interior del gobierno, sino que sobre todo el gran desorden que mostró la clase política concertacionista en los últimos años del gobierno de Bachelet. Efectivamente, la mayoría del electorado chileno votó finalmente por el candidato que les prometía el establecimiento de un gobierno alejado de la política e eminentemente técnico, que llevaría al país nuevamente en la senda del crecimiento económico. En este sentido, el actual gobierno de Sebastián Piñera tan solo ha fortalecido la presencia tecnocrática al interior del gobierno y del Estado chileno.

En los últimos años del gobierno de Bachelet, el gobierno y su tecnocracia fueron forzados por sectores de la sociedad civil a adoptar mecanismos de consulta que garantizaran un mayor grado de participación ciudadana en las políticas públicas. Esto llevó a la creación de una serie de “mesas de diálogo” en donde representantes de la sociedad civil y expertos gubernamentales discutieron por meses sobre las políticas públicas que deberían ser aplicadas en diversos ámbitos de la realidad nacional. En mi opinión, este mecanismo a través del cual la tecnocracia gubernamental a comenzado a relacionarse con sectores de la sociedad civil podría convertirse en un modelo viable

de toma de decisiones con respecto a importantes asuntos nacionales (tales como educación, salud, previsión, etc.). También bajo el gobierno de Piñera se han dado presiones desde la clase política y de la opinión pública en general para que se adopte la fórmula de Mesas de Diálogo entre funcionario de gobierno y sectores de la sociedad, como fue el caso en septiembre de 2010 con la creación de la Mesa de Diálogo para intentar resolver el conflicto mapuche.

Este mecanismo de consultación de hecho podría representar la piedra angular de un nuevo Compromiso en el sistema político chileno. Esto haría posible atender, al menos parcialmente, las crecientes demandas por un mayor grado de participación ciudadana en las políticas públicas. Pero por otro lado, constituiría una garantía de que dichas políticas tendrían, al final del día, un diseño técnico que haga que sean realistas y compatibles con los recursos financieros y humanos disponibles y que no vayan en desmedro de otros objetivos generales de gobierno. En otras palabras, se llegaría así a un punto de equilibrio entre participación ciudadana y eficiencia administrativa.

Por largo tiempo, la tecnocracia chilena vivió bajo la fuerte protección de gobiernos y presidentes que intentaron evitar con esto la influencia de grupos de presión sobre las políticas públicas. Si bien en mi opinión el aislamiento tecnocrático contribuyó positivamente al funcionamiento de la vieja democracia chilena y fue de gran efectividad para consolidar el actual régimen democrático, la contingencia pareciera exigir un mayor acercamiento entre tecnocracia y ciudadanía. Esto, lejos de debilitar a la tecnocracia, le dará una mayor notoriedad ante la población y le ayudará a fortalecer su función de ente racionalizador de las principales demandas ciudadanas en el marco de un régimen democrático moderno.

En los años venideros los partidos políticos y los políticos probablemente serán capaces de aumentar su poder e influencia en las altas esferas gubernamentales, en detrimento de la posición de los tecnócratas de gobierno. Sin embargo, creo que si esto llegara a ocurrir, no lograría alterar de manera significativa el marcado carácter tecnocrático de la democracia chilena post-1990.

Bibliografía

Akin, William E. (1977) *Technocracy and the American Dream: The Technocrat Movement, 1900-1941*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.

Angell, Alan (2007) *Democracy after Pinochet: Politics, Parties and Elections in Chile*. Londres: Institute for the Study of the Americas.

Angell, Alan (2010) 'Democratic governance in Chile', in Mainwaring, Scott y Timothy R. Scully (eds) *Democratic Governance in Latin America*, pp. 269-306. Stanford: Stanford University Press.

- Angell, Alan y Susan Carstairs (1987) "The Exile Question in Chilean Politics" *Third World Quarterly* 9(1): 148-167.
- Bell, Daniel (1960) *The End of Ideology*. Glencoe: The Free Press.
- (1973) *The Coming of Post-Industrial Society*. Nueva York: Basic Books.
- Boeninger, Eduardo (1997) *Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad*. Santiago: Editorial Andrés Bello.
- (2009) *Políticas públicas en democracia: Institucionalidad y experiencia chilena 1990-2006*. Santiago: Ugbar Editores.
- Borzutzky, S. y L. Hecht Oppenheim (eds.) (2006) *After Pinochet: Chile's Road to Capitalism and Democracy*. Gainesville: University Press of Florida.
- Borzutzky, S. y Gregory B. Weeks (eds.) (2010) *The Bachelet Government: Conflict and Consensus in Post-Pinochet Chile*. Gainesville: University Press of Florida.
- Bresser-Pereira, Luiz Carlos y Peter Spink (eds.) (1999) *Reforming the State: Managerial Public Administration in Latin America*. Boulder: Lynne Rienner.
- Brunner, José Joaquín (1986) "Las ciencias sociales en Chile: El caso de la sociología" *Documento de Trabajo* 325. Santiago: FLACSO.
- Camp, Roderic Ai (1983) "El tecnócrata en México", *Revista Mexicana de Sociología* 45(2): 579-599.
- (1985) "The Political Technocrat in Mexico and the Survival of the Political System", *Latin American Research Review* 20(1): 97-118.
- Cavallo, Ascanio (1992) "Alejandro Foxley" en *Los hombres de la transición*, pp. 141-154. Santiago: Editorial Andrés Bello.
- Cavarozzi, Marcelo (1992) "Patterns of Elite Negotiation and confrontation in Argentina and Chile" en John Higley y Richard Gunther (eds.) *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*, pp. 208-236. Cambridge: Cambridge University Press.
- Centeno, Miguel Ángel (1993) 'The New Leviathan: The dynamics and limits of technocracy', *Theory and Society* 22: 307-335.
- Centeno, Miguel Ángel (1994) *Democracy within Reason: Technocratic revolution in Mexico*. University Park: Penn State University Press.
- Centeno, Miguel A. y Sylvia Maxfield (1992) "The Marriage of Finance and Order: Changes in the Mexican Political Elite", *Journal of Latin American Studies* 24(1): 57-85.
- Centeno, Miguel Ángel y Patricio Silva (eds) (1998) *The Politics of Expertise in Latin America*. New York: Macmillan.
- Collier, David (ed.) (1979) *The New Authoritarianism in Latin America*. Princeton: Princeton University Press.
- Demmers, Jolle, Alex Fernández y Barbara Hogenboom (2001) *Miraculous Metamorphoses: The Neoliberalization of Latin American Populism*. Londres: Zed Books.
- Domínguez, Jorge I. (ed.) (1996) *Technopols: Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s*. University Park: Penn State University Press.
- Drake, Paul W. e Iván Jaksic (eds.) (1991) *The Struggle for Democracy in Chile, 1982-1990*. Lincoln and Londres: University of Nebraska Press.
- Fernández de la Mora, Gonzalo (1986) *El crepúsculo de las ideologías*. Madrid: Espasa-Calpe.

- Ffrench-Davis, Ricardo (1982) "El experimento monetarista en Chile: Una síntesis crítica" *Colección Estudios CIEPLAN* 9: 5-40.
- (2003) *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: Tres décadas de política económica en Chile*. Santiago: J.C. Sáenz Editor.
- Fischer, Frank (1990). *Technocracy and the Politics of Expertise*. Newbury Park: Sage.
- (2009) *Democracy and Expertise: Reorienting Policy Inquiry*. Nueva York: Oxford University Press.
- Fontaine, Arturo (1989) *La historia no contada de los economistas del presidente Pinochet*. Santiago: Editorial Zig-Zag.
- Foweraker, Joe, Todd Landman y Neil Harvey (2003) *Governing Latin America*. Cambridge: Polity Press.
- Foxley, Alejandro (1983) *Latin American Experiments in Neoconservative Economics*. Berkeley: University of California Press.
- (1986) *Para una democracia estable*. Santiago: Editorial Aconcagua/ CIEPLAN.
- Funk, Robert L. (2006) *El gobierno de Ricardo Lagos: La nueva vía hacia socialismo*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Garretón, Manuel Antonio (1987) *Reconstruir la Política: Transición y consolidación democrática en Chile*. Santiago: Editorial Andante.
- (ed.) (1989) *Propuestas políticas y demandas sociales*. Santiago: FLACSO. (3 volúmenes).
- (2000) *La sociedad en que vivi(re)mos: Introducción sociológica al cambio de siglo*. Santiago: Lom.
- Gil, Federico (1966) *The Political System of Chile*. Boston: Houghton Mifflin.
- Giraldo, Jeanne K. (1997) "Development and Democracy in Chile: Finance Minister Alejandro Foxley and the Concertación Project for the 1990s" en Jorge I. Domínguez (ed.) *Technopols: Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s*, pp. 229-175. University Park: Penn State University Press.
- Gouldner, Alvin W. (1979) *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*. Londres: Macmillan.
- Haggard, Stephan y Robert R. Kaufman (eds.) (1992) *The Politics of Economic Adjustment*. Princeton: Princeton University Press.
- Herf, Jeffrey (1984) *Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, S. M. Crozier, J. Watanuki, J. (1975) *The crisis of democracy: report on the governability of democracy to the trilateral commission*. Nueva York: New York University Press.
- Joignant, Alfredo (2003) "La democracia de la indiferencia: Despolitización, desencanto y malestar en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle" en Oscar Muñoz y Carolina Stefoni (eds.) *El Período del Presidente Frei Ruiz-Tagle*, pp. 83-106. Santiago: FLACSO-Editorial Universitaria.
- (2010) "The Technopol Effect: Resources, Political Competence and Performance in Government in Chile (1990-2010)". Manuscrito no publicado.
- Jones, H.S. (ed.) (1998) *Comte; Early Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kay, Diana (1987) *Chileans in Exile: Private Struggles, Public Lives*. Basingstoke: Macmillan.
- Konrad, Georg y Ivan Szelenyi (1979) *The Intellectuals on the Road to Class Power*. Brighton: Harvester Press.

- Lavín, Joaquín (1987) *Chile: Revolución silenciosa*. Santiago: Zig-Zag.
- Loveman, Brian (1979) *Chile: The Legacy of Spanish Capitalism*. Nueva York: Oxford University Press.
- Mainwaring, Scott y Timothy R. Scully (eds) (2010) *Democratic Governance in Latin America*. Stanford: Stanford University Press.
- Malloy, James y Mitchell Seligson (eds.) (1987) *Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Malloy, James M. (1979) *The Politics of Social Security in Brazil*. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
- Meller, Patricio (1984) "Los Chicago boys y el modelo económico chileno, 1973-1983", *Apuntes CIEPLAN* 43. Santiago: CIEPLAN.
- Meynaud, Jean (1968) *Technocracy*. Londres: Faber and Faber. [1964]
- Montero, Cecilia (1997) *La revolución empresarial en Chile*. Santiago: Dolmen Ediciones.
- Muñoz, Oscar y Carolina Stefoni (eds.) (2003) *El Período del Presidente Frei Ruiz-Tagle*. Santiago: FLACSO-Editorial Universitaria.
- Navia, Patricio (2004) *Las grandes alamedas: El Chile post Pinochet*. Santiago. La Tercera-Mondatori.
- O'Donnell, Guillermo (1973) *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California.
- O'Donnell, Guillermo, Phillippe Schmitter y Laurence Whitehead (eds.) (1986) *Transitions from Authoritarian Rule*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- O'Donnell, Guillermo (1996) 'Delegative Democracy' en Larry Diamond y Marc Plattner (eds), *The Global Resurgence of Democracy*, pp. 94-108. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- O'Donnell, Guillermo (1998) 'Horizontal Accountability in New Democracies', *Journal of Democracy* 9: 112-126.
- Ominami, Carlos (1991) "Promoting Economic Growth and Stability" en Joseph S. Tulchin y Augusto Varas (eds.), *From Dictatorship to Democracy: Rebuilding Political Consensus in Chile*, pp. 21-28. Boulder: Lynne Rienner.
- Panizza, Francisco (2000) 'Beyond 'Delegative Democracy': 'Old Politicians' and 'New Economics' in Latin America', *Journal of Latin American Studies* 3: 737-763.
- Puryear, Jeffrey M. (1994) *Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Putnam, Robert D. (1977) "Elite Transformation in Advanced Industrial Societies: An Empirical Assessment of the Theory of Technocracy", *Comparative Political Studies* 10(3): 383-412.
- Rabkin, Rhoda (1993) "How Ideas become Influential: Ideological Foundations of Export-led Growth in Chile, (1973-90)" *World Affairs* 156(1): 3-25.
- Ramos, Joseph (1986) *Neoconservative Economics in the Southern Cone of Latin America, 1973-1983*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Rojas, Darío (1989) *El fenómeno Büchi*. Santiago: Editorial Santiago.
- Rowney, Don K. (1989) *Transition to Technocracy: The Structural Origins of the Soviet Administrative State*. Ithaca: Cornell University Press.
- Schneider, Ben Ross (1998) "The Material Bases of Technocracy: Investor Confidence and

- Neoliberalism in Latin America” en Miguel A. Centeno y Patricio Silva (eds.) *The Politics of Expertise in Latin America*, pp. 77-95. Londres: Macmillan.
- Scully, Timothy R. (1992) *Rethinking the Center: Party Politics in Ninetieth-and Twentieth-Century Chile*. Stanford: Stanford University Press.
- Silva, Eduardo (1996) *The State and Capital in Chile: Business Elites, Technocrats, and Market Economics*. Boulder: Westview Press.
- (1991) “The Political Economy of Chile’s Regime Transition: From Radical to ‘Pragmatic’ Neo-Liberal Policies” en Paul W. Drake y Iván Jaksic (eds.), *The Struggle for Democracy in Chile 1982-1990*, pp. 98-127. Lincoln y Londres: University of Nebraska Press.
- Silva, Patricio (1994) “State, Public Technocracy and Politics in Chile, 1927-1941”, *Bulletin of Latin American Research* 13(3): 281-297.
- (2001) “Forging Military-Technocratic Alliances: The Ibáñez and Pinochet Regimes in Chile” en Patricio Silva (ed.), *The Soldier and the State in South America: Essays in Civil-Military Relations*, pp. 87-108. Londres y Nueva York: Palgrave.
- (2004) “Doing Politics in a Depoliticised Society: Social Change and Political Deactivation in Chile”, *Bulletin of Latin American Research* 23(1): 63-78.
- (2006) “Los tecnócratas y la política en Chile: Pasado y Presente”, *Revista de Ciencia Política* 26(2): 171-186.
- Silva, Patricio (2010) *En el nombre de la razón: tecnocracia y política en Chile*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Sojo, Carlos (1995) *La Sociedad después del Ajuste. Demandas Sociales, Reforma Económica y Gobernabilidad en Costa Rica. Serie La Gobernabilidad en Centroamérica*. No. 4. San José, FLACSO.
- Teichman, Judith (1997) ‘Mexico and Argentina: Economic Reform and Technocratic Decision Making’, *Studies in Comparative International Development* 32: 31–55.
- Tironi, Ernesto (2005) *El sueño chileno: Comunidad, familia y nación en el Bicentenario*. Santiago: Aguilar.
- Tulchin, Joseph S. y Augusto Varas (eds.) (1991), *From Dictatorship to Democracy: Rebuilding Political Consensus in Chile*. Boulder: Lynne Rienner.
- Valdés, Juan Gabriel (1995) *Pinochet’s Economists: The Chicago School in Chile*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Valenzuela, Arturo (1978) *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Veblen, Thorstein (1965) *The Engineers and the Price System*. Nueva York: Sentry Press. [1921]
- Vergara, Pilar (1985) *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*. Santiago: FLACSO.
- Williams, Mark Eric (2006) ‘Escaping the Zero-Sum Scenario: Democracy versus Technocracy in Latin America’, *Political Science Quarterly* 121(1): 119-139.